PRESENTACIÓN

Dr. Víctor Pérez Vargas

El **Dr. Víctor Eduardo Orozco Solano**, Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, letrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica, participa con **“El anhelado pluralismo constitucional en el ámbito europeo frente a la superioridad normativa de las Constituciones de cada Estado: la protección multidimensional de los derechos fundamentales en Europa”**. Se refiere a los diversos planos de tutela de los derechos fundamentales son protegidos en el ámbito europeo (protección multidimensional): una primera dimensión de tutela de los derechos fundamentales a lo interno de cada Estado. Otra a nivel internacional: del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Otra dimensión sería encontrada en el plano *“supranacional”*, a través de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en la cual se ha desarrollado el carácter de primacía que ostenta esa normativa, en su ámbito de competencia, por sobre las disposiciones de cada Estado miembro, en las materias que expresamente han sido atribuidas por los Estados a la unión.

El filólogo clásico y abogado, **Lic. Henry Campos Vargas**, nos brinda **“La mujer y las fuentes del derecho en Roma: una aproximación con la ayuda de la literatura”**, que tiene como propósito ofrecer una aproximación a la forma como la mujer romana participó en la creación del Derecho. Cita, entre muchos ejemplos, la forma como las mujeres romanas se enfrentaron a Catón al saber que éste se opondría a la derogación de la *Lex Oppia Sumptuaria*, ley que reprimía el empleo de ornamentos femeninos lujosos; son varios los logros o reivindicaciones de las mujeres en su paulatino desprendimiento de la tutela. El estudio es rico en referencias a obras clásicas en las que siempre la mujer aparece desempeñando un papel activo en la economía y en la política.

El **Lic. Frank Harbottle Quirós**, de la Universidad de Costa Rica, egresado de la Maestría de Criminología de la Universidad Estatal a Distancia, Defensor Público y Letrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, participa con **“Las medidas de seguridad en la jurisprudencia penal costarricense a propósito de la entrada en vigencia de la Ley de creación del recurso de apelación”**. El autor nos informa que La jurisprudencia nacional en los últimos años ha sido vacilante en diversos tópicos –los cuales analiza en el presente artículo– relacionados con las medidas de seguridad, a saber: *i)* la obligatoriedad de que los Jueces cuenten con el informe del Instituto de Criminología para imponer este tipo de medidas; *ii)* su procedencia a personas con imputabilidad disminuida, y, *iii)* su aplicación en materia penal juvenil. En sus conclusiones sostiene que con la “Ley de Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, otras Reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en el Proceso Penal, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia es la llamada a uniformar la jurisprudencia en materia penal (de adultos y juvenil) y por supuesto, de forma específica, en lo que se refiere al tema de medidas de seguridad.

“Principios de la Jurisprudencia Arbitral Comercial Internacional” se titula el valioso aporte del **Lic. Federico Piedra Poveda**. El conocimiento de estos principios cobra especial importancia en nuestro medio, dado que ya son varios laudos nacionales los que se apoyan en ellos, como fuente material doctrinaria, como lo demostraron en sus trabajos de graduación Rosemarie Mc Laren Magnus y Ana Lucía Ramírez. El trabajo del Licenciado Piedra brinda nuevos enfoques y nuevas afirmaciones de estos principios y comenta el papel de la Cámara de Comercio Internacional y del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado en su desarrollo. En su opinión, los principios de UNIDROIT no son más que una recopilación de *Lex mercatoria*, o sea que son *Lex mercatoria* codificada, dicho sea de paso de una manera muy completa, pero no agotan los Principios de *la Lex mercatoria*, ya que esto sería imposible debido a su vastedad y constante evolución.

“Las comunicaciones ciudadanas del CAFTA por incumplimiento de la Ley ambiental: consideraciones sobre un procedimiento nacional” es la contribución de nuestro asiduo colaborador, **M.Sc. Jorge Cabrera Medaglia**, Profesor del posgrado en Derecho agrario y ambiental y de la Maestría en Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica; Asesor Legal de Instituto Nacional de Biodiversidad. Investigador Principal en Derecho de la Biodiversidad del Centro de Derecho Internacional del Desarrollo Sostenible (con sede en Montreal). Integrante de la Lista de árbitros ambientales del CAFTA-DR. El artículo explora los conceptos generales de las comunicaciones ciudadanas como un mecanismo de denuncia al país por incumplimiento de la legislación ambiental establecido en el CAFTA-DR; se expone la forma como este novedoso instrumento es regulado en el CAFTA-DR y en la legislación nacional y se concluye la necesidad de establecer un procedimiento interno de atención y trámite que establezca normas de coordinación y respuesta expeditas y efectivas. Esta investigación se realizó en el marco de un proyecto más amplio sobre denuncias ambientales apoyado por la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, proyecto DR-CAFTA. En su conclusión, afirma que la legislación nacional indicada no contempla una regulación adecuado del trámite interno para atender las comunicaciones ciudadanas. Por la naturaleza e importancia de responder a una comunicación admitida contra el país, es necesario contar con un protocolo de coordinación para preparar las respuestas del caso y dar el seguimiento a las mismas, según se explicó al analizar los procedimientos de la Secretaría de Asuntos Ambientales.

El **M.Sc. Mario Peña Chacón**, contribuye con **“El principio de no regresión ambiental a la luz de la jurisprudencia constitucional costarricense”**. El autor es Profesor de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y de las Maestrías de Derecho Ambiental y Derecho Público Comparado Franco-latinoamericano del Sistema de Estudios de Posgrados de la Universidad de Costa Rica. Miembro de la Comisión de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Nos explica que según el principio de no regresión la normativa y la jurisprudencia ambiental no deberían ser revisadas si esto implicare retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad. Tiene como finalidad evitar la supresión normativa o la reducción de sus exigencias por intereses contrarios que no logren demostrar ser jurídicamente superiores al interés público ambiental, ya que en muchas ocasiones, dichas regresiones pueden llegar a tener como consecuencias daños ambientales irreversibles o

de difícil reparación. El autor deduce su contenido, alcances y limitaciones acudiendo al Derecho Internacional Ambiental, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional regulador del Libre Comercio y las Inversiones, así como a la misma Constitución Política y en especial, a la jurisprudencia emanada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En la conclusión, el Máster Peña Chacón sostiene que se hace necesaria la consagración expresa del principio de no regresión en el contexto de la protección del medio ambiente en la medida que si queremos lograr una rápida y eficaz implementación del desarrollo sostenible es esencial hacer progresar el derecho ambiental e integrarlo mejor en las otras ramas de nuestra disciplina jurídica.

Con las modificaciones introducidas por el CAFTA a nuestra Ley en materia de representantes y distribuidores de casas extranjeras ha surgido la importancia de determinar cuáles son los derechos adquiridos de que gozaban y seguirán gozando estos auxiliares del comercio. El **Lic. Carlos José Carrera Castillo**, Especialista en Derecho Comercial y Profesor de Derecho Comercial en la Universidad de Costa Rica, opina al respecto en su artículo “**Comentarios en relación con la reforma operada a la Ley de Protección al representante de casas extranjeras, N° 6209 y derogación del inciso b) del artículo 361 del Código de Comercio, Ley N° 3284**”, donde glosa las modificaciones, reformas, adiciones y derogatorias al texto legal citado, para los efectos de describir de manera general la nueva regulación sobre ésta materia y las reformas y adiciones legislativas que introduce.

En este mismo tema, con una posición restrictiva de los derechos adquiridos de los representantes y distribuidores, en “El Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana Centroamérica y Estados Unidos y la Ley de Protección al Representante de Casas Extranjeras en la jurisprudencia costarricense”, participa el especialista en Derecho Comercial de la Universidad de Costa Rica, Lic. Carlos Campos Ulate. El objetivo general de este artículo, es analizar la importancia del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos y sus implicaciones en el régimen normativo de las casas extranjeras: derechos adquiridos, y procesos indemnizatorios.

El **Lic. Luis E. Sibaja Guillén**, abogado litigante, miembro del bufete Lex Counsel, Licenciado en Derecho, con estudios de especialización en Comercio Exterior, de postgrado en Derecho Internacional Privado, y de Maestría en Negocios Internacionales y Litigio Internacional, comparte con nosotros sus opiniones sobre “**El examen del orden público internacional al acuerdo arbitral internacional**”. Explora la posibilidad de aplicación del *orden público internacional* al acuerdo arbitral, a la luz de conceptos generales del derecho internacional privado y dentro del contenido de la Convención del Nueva York de 1958, en especial, el Artículo II(3) de esta Convención, que trata sobre la posibilidad de desaplicar el acuerdo arbitral por considerarse éste nulo, ineficaz e/o inaplicable.

También en materia de arbitraje internacional, ofrecemos el muy actual estudio, “**Aproximaciones preliminares al nuevo Reglamento de Arbitraje de la C.C.I.**” del **Lic. Mauricio París Cruz**. Nos explica que uno de los objetivos de la Cámara de Comercio Internacional ha sido la reducción de costos y tiempos en el arbitraje. Y es que no podía ser de otra forma cuando ya, desde el año 2005,

la Comisión de Arbitraje de la Cámara había rendido un informe sobre técnicas para controlar el tiempo y costos en el arbitraje, en donde se ponía en evidencia que el 82% de los costos incurridos por las partes en el arbitraje eran aquellos incurridos por las partes para presentar su caso, costos que comprendían honorarios de abogados, gastos relativos a pruebas testimoniales y periciales, y otros costos relacionados. Solamente un 18% de los costos eran los correspondientes a honorarios y gastos de árbitros y costos administrativos de la Corte.

Del abogado litigante, **Lic. Carlos Arturo Meneses Reyes**, publicamos sus “**Apreciaciones sobre la opción o la naturalización para adquirir la nacionalidad costarricense**”. El autor considera que existe un vacío o limbo jurídico con relación a la reglamentación del artículo 17 de la Constitución Política que confiere la calidad de costarricense por trascendencia a los hijos menores de edad de costarricenses por naturalización. Quiso el constituyente primario de 1949 que por opción (decisión) de sus padres adquirieran la calidad de costarricenses, ipso facto. Interpretaciones sesgadas de la Sección de Actos Jurídicos del Registro Civil improvisan o simulan procedimientos con anotaciones y/o Advertencias en Asientos de Registro Civil de Nacimiento de hijos de costarricenses naturalizados nacidos en el exterior, lo cual está generando una situación jurídica sin precedentes. Casos como este, ameritan la intervención del Legislador.